

El momento alfonsinista

Por Carlos Altamirano*

(CONICET-UNQ)

¿Cuánto duró lo que algunos llamaron “primavera alfonsinista”? No mucho, tal vez dos años. No me refiero al período de gobierno que tuvo a Raúl Alfonsín al frente del poder ejecutivo y que concluyó en 1989, antes de que se cumpliera el tiempo de mandato del presidente, demolido por el terremoto de la hiperinflación. Hablo de un momento de límites imprecisos, momento de brío y expectativas públicas, de promesas y reexamen –sólo las Fuerzas Armadas, los “señores de la guerra” y sus servidores estaban en la mira, blancos del repudio y excluidos de la amistad política–, que tuvo una duración efímera. Si para los que hoy son jóvenes el 30 de octubre y el 10 de diciembre de 1983 remiten a hechos de un pasado del que no tienen otra memoria que la aprendida (en la familia, en la escuela, en la universidad), para quienes hace mucho que hemos dejado atrás la juventud, aquel año, su prólogo en 1982, durante los meses que siguieron a la derrota en las Malvinas, y lo que siguió, ya bajo el gobierno constitucional, pueden ser objeto de rememoración.

Pues bien, es ese corto tiempo el que quiero evocar en lo que sigue. Lo que voy exponer no es el fruto de una investigación: es un ensayo basado en los recuerdos y en algunas lecturas hechas por entonces y después. No ignoro, por supuesto, lo selectiva que es la memoria, tanto en lo que recuerda como en lo que olvida, ni la mezcla que produce el recuerdo entre hechos, ideas y deseos. Tal como lo veo ahora, de esa mezcla también estaban hechos los días de aquel momento.

La oportunidad de Alfonsín

En la segunda mitad de 1982 la Argentina se halló ante una situación repetida en su convulsionada historia política: la apertura de un horizonte electoral, otorgada por una dictadura sin margen de sobrevivencia, para volver al régimen de la Constitución. Si desde 1930 el fin de un régimen militar y la salida electoral no eran hechos nuevos en la experiencia nacional, esta vez lo ocurrido durante los

* Investigador Principal del Conicet y Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, institución donde dirigió el Centro de Estudios e Investigaciones y, durante varios años, el Programa de Historia Intelectual. Miembro fundador, con Beatriz Sarlo y Ricardo Piglia, de la revista *Punto de vista*, integra actualmente el consejo de dirección de *Prismas, revista de historia intelectual*. Dictó cursos y conferencias en universidades de su país, en la Universidad de Princeton y de Maryland (EE.UU.) y en la École des Hautes Études (Francia). En 2008 fue profesor invitado en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Harvard. Ha publicado, entre otros trabajos, los siguientes libros: (2001, 2011) *Peronismo y cultura de izquierda*, (2001) *Bajo el signo de las masas, 1943-1973*, (2005) *Para un programa de historia intelectual*, (2006, 2013) *Intelectuales. Notas de investigación*. En colaboración con Beatriz Sarlo escribió (1983) *Literatura/sociedad* y (1997) *Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia*. Tuvo a su cuidado la dirección del diccionario *Términos críticos de sociología de la cultura* (2002). Ha coordinado una *Historia de los intelectuales en América Latina*, obra colectiva cuyo primer volumen apareció en 2008 y el segundo en 2010. Le concedieron el Premio Konex al ensayo político en dos ocasiones (2004 y 2007); ha sido becario del Social Science Research Council (1984), de la Rockefeller Foundation (1991), de la John S. Guggenheim Foundation (2004) y de la Robert F. Kennedy Foundation (2008). En 2011 la Universidad Ricardo Palma del Perú le otorgó el título de Profesor Honorario de dicha casa; en el 2013, la Universidad Nacional de Mar del Plata lo honró también con la distinción de Profesor Honorario y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador lo distinguió por aportes hechos a la Sociología de la Cultura.

DOSSIER

El 83. Evocaciones, lecturas y memorias a treinta años
de recuperación de la democracia

seis años del poder autoritario había ido más lejos que nunca antes. Al emprender la operación que la derrumbaría (el desembarco en las Malvinas el 2 de abril de aquel año), la dictadura implantada en marzo de 1976 ya daba signos de que se hallaba en dificultades por los problemas de la economía nacional, las divisiones internas del cuerpo militar y un aislamiento político alarmante para un régimen que había anunciado el propósito de regenerar a la sociedad argentina y a sus grupos dirigentes. La rendición ante los británicos el 14 de junio, después de una breve guerra no declarada por ninguna de las partes, tuvo un efecto fulminante: la humillación de la derrota –que añadió a la pérdida de nuevas vidas jóvenes el espectáculo de las divisiones y las acusaciones mutuas entre las tres armas– le arrebató a la Junta Militar toda legitimidad para seguir gobernando. Más aún, la dejaría sin espacio aun para negociar con los actores civiles de la transición el tratamiento que le darían las autoridades surgidas de las urnas al complicado fardo de problemas que heredaban de la dictadura.

Nada parecía seguro en el interregno que fueron los meses siguientes a la rendición del 14 de junio. Aunque tremendamente debilitadas desde el punto de vista político, los jefes militares se resistían a abandonar el poder sin una concertación previa respecto del rumbo que tomaría el gobierno que las sucediera. De los cuarteles procedían presiones, rumores y amenazas. La posición de los partidos políticos, la mayoría de los cuales se hallaban agrupados en la Multipartidaria, que era un órgano coordinador, no era unánime. Pero para entonces la sociedad civil ya se había activado y les reducía el espacio a los dirigentes políticos más inclinados a hacer concesiones a los hombre se armas. En diciembre de aquel año una gran manifestación marchó a la Plaza de Mayo. A diferencia de la protesta de marzo del año anterior, que reclamaba “Pan y Trabajo” y había sido predominantemente obrera, lo que ahora llenó la histórica plaza fue una multitud de clases medias que reclamaba el fin de la dictadura y el alejamiento de los militares. Y al igual que la precedente, fue ferozmente reprimida.

El dirigente político que mejor aprovechó aquel momento en que las cosas aún no se divisaban con claridad fue Raúl Alfonsín. Primera figura del Movimiento de Renovación y Cambio, el agrupamiento que reunía al ala progresista del partido Radical, Alfonsín pertenecía a la generación política que había hecho sus primeras armas en la lucha contra Perón y se alineó con Ricardo Balbín en la división de 1956 entre frondizistas y balbinistas. Desde 1972 desafiaba la hegemonía del balbinismo en la ucr y tenía de su lado al sector universitario del partido y a la fracción juvenil reunida en Junta Coordinadora Nacional, cuyos dirigentes y militantes procedían de la agrupación estudiantil Franja Morada de los años setenta. En julio de 1982, cuando aún representaba la minoría dentro del radicalismo, Alfonsín se adelantó a todos. Mientras el conjunto de las fuerzas políticas buscaba todavía adecuarse al nuevo contexto de un régimen militar agotado, el líder de Renovación y Cambio organizó en la Federación de Box el primer acto público de carácter político. En esa tribuna estrenó, podría decirse, el discurso que con pocas variaciones enunciará en la campaña que lo llevará a la presidencia de la república.

Los principios ideológicos básicos del discurso alfonsinista –liberalismo político, Estado activo en la economía, democratismo, centralidad de los partidos como representantes de la diversidad de intereses y la pluralidad de las opiniones, progresismo– estructuraban los argumentos de *La cuestión argentina*, el libro que Raúl Alfonsín había publicado en 1981. Allí se esbozaba igualmente la visión que más adelante orientará su estrategia frente a las responsabilidades y las secuelas de la “guerra sucia”. Es decir, lo que en el lenguaje público tomará más tarde el nombre de “teoría de los dos demonios”, que descansaba en la condena de las dos violencias, la organizada por los grupos armados de la “ultra-izquierda” (en el libro el ingreso del terrorismo de izquierda se hallaba simbolizado por el secuestro y la eliminación del general Aramburu), y la violencia parapolicial representada por la Triple A, “de signo contrario, pero

DOSSIER

El 83. Evocaciones, lecturas y memorias a treinta años
de recuperación de la democracia

igualmente feroz”. Al asumir la presidencia de la Nación, el general Videla había hecho la promesa de respetar los derechos humanos y anunció que sólo las instituciones del Estado tendrían el monopolio en el uso de la fuerza, recordaba Alfonsín. Sin embargo, ¿cómo se avenía ese propósito declarado “con la realidad que nos muestra millares de desaparecidos y centenares de presos que no están sometidos a proceso?”.¹ En el ejercicio de la fuerza se habían perdido los límites entre lo que era lícito y lo que era ilícito. Estas pocas referencias indican la línea interpretativa de la que no se apartará cuando, ya como presidente, ordene a través de dos decretos el juicio a los ex comandantes que integraron las juntas militares y la persecución penal de los dirigentes de los grupos guerrilleros Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo.

El debate posterior, sobre todo en los organismos de derechos humanos y la prensa militante anti-alfonsinista, atribuyó al gobierno radical la elaboración del argumento de las dos violencias, es decir, que en los años setenta el país se había visto desgarrado por el enfrentamiento de dos sectores que en la lucha política recurrieron a la violencia y al terrorismo. Sin embargo, como lo muestran de modo palmario los trabajos de Sebastián Carassai, esa tesis recogía un juicio ampliamente extendido en la opinión pública nacional antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.² La sólida investigación de Carassai recoge muchas pruebas en ese sentido. Entre ellas, elocuente es el ejemplo de la prédica del diario *La Opinión* en las postrimerías del gobierno de Isabel de Perón. Órgano predilecto de las capas medias ilustradas y progresistas, desde sus páginas se llamaría a combatir contra los dos terrorismos –el de los partidos armados de izquierda y el de la derechista y paragubernamental Triple A. Escribía, por ejemplo, Jacobo Timerman, director de *La Opinión*, en diciembre de 1975:

“el país, la Argentina, no está en guerra, no ejerce la guerra. Las batallas y los bárbaros asesinatos que hoy ensangrentan el territorio y llenan de espanto a sus habitantes, tienen sólo tres participantes: el Ejército, los delincuentes subversivos de izquierda, los delincuentes subversivos de derecha. Si el país no está aún en guerra, es porque no fue convocado. Los argentinos quieren la guerra contra los dos terrorismos, y saben que pueden ganarla”.³

No menos significativa y sintomática de un estado de ánimo colectivo es la posición que adoptó en sus comienzos la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), uno de cuyos fundadores fue Raúl Alfonsín. La APDH, creada por un grupo de personalidades públicas a fines de 1975, reclamó en sus primeras declaraciones que el Estado pusiera fin a la violencia, cualquiera fuera su signo político. (Que la fórmula de Alfonsín para encarar el pasado inmediato y la violación sistemática a los derechos humanos bajo la última dictadura tuviera una genealogía, no la hace más justa, obviamente, pero saberlo y tenerlo presente permite sustraer la discusión de las simplificaciones facciosas.)

En la acelerada marcha que llevó a las elecciones del 30 de octubre de 1983, Alfonsín se adelantó a sus rivales dentro del partido en la carrera por la candidatura a presidente de la nación y forjó, ya antes de ser reconocido como el candidato de la ucr, una imagen de líder nacional que interpelaba a un electorado que iba mucho más allá del voto cautivo radical. Esta estrategia, que se reveló

¹ Alfonsín R. (1981) *La cuestión argentina*, Buenos Aires: Editorial Propuesta Argentina, p. 53.

² Carassai S. (2010) “Antes de que anochezca. Derechos humanos y clases medias en la Argentina antes y en los inicios del golpe de Estado de 1976”, en *América Latina hoy*, vol. 54; “La violencia de ‘los dos lados’. Genealogía de la teoría de los dos demonios”, de próxima aparición.

³ Carassai, *op. cit.*, pp. 73-74.

DOSSIER

El 83. Evocaciones, lecturas y memorias a treinta años
de recuperación de la democracia

muy eficaz y atrajo hacia las filas del partido a nuevos adherentes, resueltos a consagrar el triunfo de Alfonsín en la competencia interna, se prolongará en la campaña electoral por alcanzar la presidencia.

El discurso alfonsinista

Como es sabido, la eficacia de un discurso político se mide por su capacidad de imponer la definición de la disyuntiva en un momento dado y ofrecer, para agregados sociales amplios, esquemas de comprensión de acontecimientos y experiencias colectivos. Tanto la esperanza como los temores resultan orientados de acuerdo con esas configuraciones articuladoras de sentido. Así funcionó durante unos pocos años lo que se llamó “discurso alfonsinista”, un campo de significaciones político-culturales cuyo alcance excedía las fronteras del radicalismo e incluso la de los votantes de Alfonsín. Por ejemplo, la antinomia característica de ese discurso –la oposición democracia/autoritarismo– trazó un límite entre lo legítimo y lo ilegítimo al que los propios adversarios políticos no podrán sustraerse. Cuando en 1985 Antonio Cafiero, uno de los líderes de la Renovación peronista, resumió lo que a su criterio debía ser un peronismo (o nacionalismo popular) a la altura de los tiempos, inscribió la definición dentro de aquella dicotomía puesta en circulación por el alfonsinismo: “El nacionalismo popular moderno es democrático y no autoritario; solidario y no estatista; transformador y no conservador. Debe aventurarse decididamente al futuro y abandonar la nostalgia paralizante. Por ello, debe ser creativo y no imitativo”.⁴

La idea y el sentimiento de un nuevo comienzo, de una suerte de punto cero en que se deja atrás una historia de errores, extravíos y sufrimientos, para dar nacimiento a otro curso de la vida nacional, libre de esos males, son tan frecuentes en la Argentina como los diagnósticos sobre su decadencia, es decir, la imagen de la Argentina como experiencia frustrada.⁵ El verbo Alfonsín tuvo mucho de esa convicción inaugural. En su palabra, el gobierno que presidía ligaba dos hechos: la vuelta a la democracia y, simultáneamente, el punto de partida de una nueva marcha. Durante un tiempo el voluntarismo político que lo animaba se transmitió a una parte de la sociedad argentina, en particular a sus culturalmente movedizas clases medias urbanas. Incluso contagió a una parte significativa de sus adversarios políticos.

Todo esto no quiere decir que no hubiera rechazos netos al discurso alfonsinista. Las manifestaciones de ese cuestionamiento de raíz aparecieron tanto en la derecha civil y militar como en la izquierda. En la derecha liberal y en una parte del alto clero católico se sospechaba que el presidente y, sobre todo, su entorno intelectual, no fueran sino vehículos del eterno enemigo, el comunismo. La iniciativa de juzgar a las juntas militares era vista como peligrosa, además de injusta, cuando no se la consideraba la prueba más directa de que se buscaba destruir a las Fuerzas Armadas y dejar indefensa a la nación. Ahora bien, si la afinidad ideológica con la socialdemocracia era objeto de censura en la derecha civil y militar porque implicaba alianzas ajenas a la tradición argentina, además de connivencia con una cultura de la subversión, en un sector de la izquierda se denunciaba esa misma afinidad porque inspiraba ilusiones infundadas en que el cambio social pudiera verificarse sin rupturas revolucionarias. En otras palabras: para una parte de la izquierda el alfonsinismo era una nueva versión del insidioso reformismo.

Temas de la transición

⁴ *La Razón*, 19/10/85.

⁵ Cf. de Kozel A. (2008) *La Argentina como desilusión. Contribución a la historia de la idea del fracaso argentino (1890-1933)*. México: Nostromo Ediciones, donde puede comprobarse que el tópico surge muy tempranamente.

DOSSIER

El 83. Evocaciones, lecturas y memorias a treinta años
de recuperación de la democracia

En los primeros años del gobierno alfonsinista el foco del debate y de la reflexión intelectual estuvo en la política, que cobró nuevo espesor en los análisis. Esta atención prestada al campo político, a sus condiciones de funcionamiento, sus actores, fueran los partidos o las corporaciones, reflejaba sin duda la preocupación por asentar la democracia después de la traumática experiencia de la dictadura, cuyas atrocidades salían a la luz pública día a día. ¿La democracia política recuperada había llegado para quedarse? Lo ocurrido diez años atrás estaba aún fresco y prevenía contra cualquier idea fácil, en primer término contra la idea de que bastaba dejar atrás el régimen autoritario y volver al Estado de derecho a través de elecciones sin proscriptos para que la democracia se volviera un hecho firme en suelo argentino. Era necesario hacer un camino, atravesar un tiempo. Como escribía Oscar Landi en 1984: “Una de las afirmaciones más convincentes que circula en el debate político nacional es la que alude a la necesidad de ‘dar tiempo a la democracia’”.⁶ El concepto para pensar ese proceso temporal que exigía la consolidación fue el de *transición*, acuñado en los estudios politológicos sobre la democratización a partir de regímenes autoritarios.

La ciencia política hizo su ingreso por ese tiempo. Si bien la carrera de Ciencia Política de la UBA se creó en abril de 1985, el vocabulario, los temas y las lentes de análisis procedentes de esa disciplina ya se hallaban incorporados al examen y la discusión del proceso que estaba en curso. Podría decirse que por entonces se operó en el espacio de las ciencias sociales un desplazamiento, el que alejaría del centro a la sociología, que reinó en los años sesenta y setenta, para dejar lugar al saber de la ciencia política. Un libro muy esperado y comentado, *El estado burocrático-autoritario: 1966-1973*, de Guillermo O'Donnell, publicado a fines de 1982 contribuyó sin dudas al prestigio que la disciplina recién llegada adquirió entre los jóvenes que hacían su ingreso en la universidad. Por cierto, ella se cultivaba en instituciones como Flacso o en centros de investigación financiados por fundaciones del exterior, como el Cedes. En los años de la dictadura militar, algunos investigadores habían buscado que esos centros funcionaran a la manera de micro-sociedades intelectuales, ambientes de estudio y reflexión sobre la sociedad y la política nacional preservados de la vigilancia y la censura del régimen. Y tras la salida del orden autoritario, gran parte de los investigadores de esos centros privados se insertaron en algunos de los trayectos que se hicieron posibles después del 10 de diciembre de 1983, de la enseñanza en la universidad pública al ingreso en la administración estatal, pasando por las variadas formas de compromiso político que generaba la actividad de los partidos políticos.

La conciencia de la inestabilidad de la vida política nacional no era un hecho nuevo (se hablaba de ella desde al menos los años sesenta). “La crisis político-social ya no sirve para marcar las transiciones entre situaciones sólidamente establecidas; ella es ahora el elemento constante [...]”, escribía, por ejemplo, Tulio Halperin Donghi en 1961.⁷ Los sociólogos construirían varias tesis para explicar que en el país la anormalidad fuera lo permanente. Para Gino Germani la Argentina padecía de un desajuste entre modernización y desarrollo, es decir, era un país cuya modernización sobrepasaba los alcances de su desarrollo económico. Otra tesis fue la del empate social: después de 1955, según este argumento, los dos bloques o constelaciones socio-políticas que se disputaban la dirección de la sociedad nacional tenían poder de veto sobre los proyectos del adversario, pero ninguno resultaba capaz de imponer su supremacía sobre el otro. El primero en formularla fue Torcuato Di Tella en 1970. Unos años más tarde la hizo suya Juan Carlos Portantiero, quien la reelaboró de acuerdo con los conceptos de un marxismo de inflexión gramsciana, rebautizando el empate como “empate hegemónico”.

⁶ “Los tiempos de la política”, recogido en Landi O. (1988) *Reconstrucciones. Las nuevas formas de la cultura política*. Buenos Aires: Puntosur, p. 85.

⁷ Halperin Donghi T. (1961) “Crónica del período”, en Paíta, José, *Argentina 1930-1960*, Buenos Aires: Sur.

DOSSIER

El 83. Evocaciones, lecturas y memorias a treinta años
de recuperación de la democracia

Guillermo O'Donnell, en fin, retomó esta clave muy poco después con la intención de hacerla menos descriptiva y conferirle mayor fundamento empírico y mayor capacidad analítica.⁸

Si no era nueva la conciencia de la inestabilidad crónica, la experiencia de la dictadura no hizo más que reforzarla. En comparación con la larga vida de la dictadura brasileña, implantada en 1964, o también con la de Pinochet, el Proceso de Reorganización Nacional, como se autodenominó el régimen militar argentino, no tardó en mostrar fallas y signos de zozobra que procedían de su propio interior y ya eran visibles hacia 1980. En suma, la inestabilidad no era sólo un rasgo de los gobiernos civiles, sino que el terreno resultaba movedizo también para los experimentos autoritarios. Las lentes de la ciencia política pusieron bajo examen otros aspectos de la dinámica política nacional con el propósito de captar su lógica. Este será, por ejemplo, el objeto de Marcelo Cavarozzi en *Autoritarismo y democracia (1955-1983)*, donde mostrará el funcionamiento de un sistema político dual, que comenzó a cobrar existencia tras el derrocamiento de Perón en 1955 y se consolidó en los años de Frondizi. Cavarozzi observaba que en la Argentina, paralelamente a la esfera político-legal, con sus actores y escenarios institucionales, como los partidos y el congreso, operaba otra, en conflictiva relación la primera, donde se hacían alianzas y pactos de alcance político, o sea, una especie de parlamento extra-institucional, un “parlamento negro”. Actores de este escenario eran asociaciones corporativas, como los gremios obreros y las patronales, pero también las Fuerzas Armadas.

El recelo hacia las corporaciones y los pactos corporativos, así como la preocupación porque esa realidad siguiera obrando en desventaja de una democracia de partidos, como en el pasado reciente, y obstruyera su afianzamiento, estuvieron presentes desde el comienzo de la transición. Ese recelo no fue ajeno a la denuncia que llevara a cabo Alfonsín en 1983, en plena campaña presidencial, contra un pacto en gestación entre la cúpula militar y la cúpula sindical peronista. De acuerdo con la acusación, las conversaciones reservadas entre jefes del ejército y dirigentes gremiales daban por descontado que el peronismo ganaría los comicios y estaban destinadas a moderar el trato que se daría bajo el gobierno que surgiera de las urnas a los hechos acontecidos durante la dictadura, principalmente los relativos a la cuestión de los “desaparecidos”. La denuncia del candidato radical fue muy efectiva en términos electorales: golpeó al peronismo y, sobre todo, a Lorenzo Miguel, el jefe sindical que participaba de esas conversaciones con las autoridades de la dictadura.

¿Cómo evitar la reedición de una experiencia atroz como la que acababa de clausurarse? Junto con la preocupación por la Argentina “corporativa”, esta pregunta de quienes rumiaban en torno de lo que Guillermo O'Donnell llamó “ese viejo enigma de la democracia en la Argentina” orientó la atención sobre nuestra sociabilidad, en busca de una matriz que ayudara a aclarar tanto la crisis crónica como la ferocidad de la última dictadura. Es probable que haya sido justamente O'Donnell quien más se atreviera en esa línea interpretativa en varios ensayos y, principalmente en dos de ellos –“Democracia en la Argentina. Micro y macro”⁹ y, sobre todo, *¿Y a mí qué me importa? Sociabilidad y autoritarismo en Brasil y Argentina*–.¹⁰ Lo que llevó al autor a los análisis que encierran estos ensayos fue la convicción de que los estudios que reflejaban el trabajo de la ciencia política, incluidos los que él mismo había producido, resultaban insuficientes, si bien eran ineludibles, para comprender lo sucedido en la Argentina; que resultaba necesario complementar la labor

⁸ Di Tella T. (1970) “Inmovilidad o coexistencia en la Argentina”, en Petras J. y Zeitlin M., *América Latina: ¿Reforma o Revolución?*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo; Portantiero J. C. (1973) en *Pasado y Presente*, Año IV (nueva serie) n° 1, abril/junio; O'Donnell G. (1977) “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, en *Desarrollo Económico*, n° 54, enero-marzo.

⁹ Incluido en la compilación de Osztak O. (1984) *El 'Proceso', crisis y transición democrática*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

¹⁰ O'Donnell G. (1984) *¿Y a mí qué me importa? Sociabilidad y autoritarismo en Brasil y Argentina*. Buenos Aires: Estudios Cedes.

DOSSIER

El 83. Evocaciones, lecturas y memorias a treinta años
de recuperación de la democracia

realizada con los conceptos y criterios convencionales de la politología con otro tipo de exploraciones, aunque estuvieran menos formalizadas. Con la hipótesis de que descripciones y análisis que tomaran por objeto situaciones e interacciones de escala micro podían arrojar luz sobre tendencias de alcance macrosocial, los ensayos mencionados fueron de los más arrojados y sugestivos que se escribieron en los primeros años de la transición.

Nuevos mapas

Una noción de vieja data, “progresismo”, cobró nueva circulación y a menudo se superpuso con (o tomó el puesto de) la noción de izquierda reformista o democrática en el lenguaje público, dejando ver que en la cultura política las identidades eran más inciertas que quince o veinte años atrás. A este proceso de reformulaciones no escaparon los intelectuales de la izquierda peronista o próxima al peronismo. La revista *Unidos*, dirigida por Carlos Álvarez, fue el principal vehículo del trabajo ideológico que implicaba discernir, dentro de la tradición peronista, lo contingente de lo invariable y conciliar el cambio con la permanencia de la comunidad nacional-popular. El libro de ensayos de un colaborador de la revista, Oscar Landi, *Reconstrucciones. Las nuevas formas de la cultura política* (1988), acaso sea el mejor ejemplo del esfuerzo aplicado a fundamentar el cambio y la continuidad. *Unidos* logró atraer a sus páginas a numerosos intelectuales procedentes de la izquierda peronista y socialcristiana, como Horacio González, Felipe Solá, Ariel Colombo, Arturo Armada, Ernesto López, Vicente Palermo, Norberto Ivancich, entre otros. La revista no era formalmente un órgano del sector cafiérista de la Renovación, pero varios de sus miembros colaboraban con esa corriente, con la expectativa de que bajo su impulso se abriera paso un proceso democratizador en que hallaran lugar –y posibilidades de expresión– posiciones e ideas situadas a la izquierda de los peronistas que sólo aspiraban a hacer del justicialismo un socio del radicalismo en la gestión de un sistema bipartidista.

A ese tiempo de identidades algo flotantes corresponde la idea de “posperonismo”, enunciada por Álvaro Abós (“el peronismo, tal como lo hemos conocido, ese fenómeno político que protagonizó las décadas que van de 1946 a 1976, ha caducado”),¹¹ así como la autodefinición de José Pablo Feinmann: “en este momento creo que soy un peronista en tránsito”.¹² El peronismo de las certezas en que había militado ya no existía (o parecía no existir), el de los años setenta y la jp: “El peronismo del '70 [...] me enmarcaba dentro de los movimientos de liberación nacional y social del Tercer Mundo, dentro de un liderazgo poderoso como el de Perón. Además me enmarcaba dentro de una militancia multitudinaria como era la de la Juventud Peronista y teníamos referentes políticos internacionales como Mao, la revolución cubana y Vietnam. En estos momentos esas cosas desaparecieron o entraron en crisis”.¹³

El movimiento pierde impulso

Podría decirse que hasta 1985 el gobierno presidido por Alfonsín tuvo en sus manos la iniciativa en la vida política argentina. En diciembre de ese año se conoció el fallo de la Cámara que juzgó a las Juntas militares y en el que se condenaba a prisión a varios jefes por los crímenes cometidos bajo su mando y por el plan terrorista con que habían combatido a los grupos guerrilleros. La sentencia no podía considerarse sino como una victoria del presidente, que había ordenado el proceso a la cúpula militar. El triunfo electoral de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, registrado poco antes, así como el fortalecimiento general de la llamada Renovación

¹¹ Abós A. (1986) *El posperonismo*. Buenos Aires: Legasa.

¹² Feinmann J. P. (1987) *López Rega. La cara oscura de Perón*. Buenos Aires: Legasa, p. 117.

¹³ *Ibid.*, p. 118.

DOSSIER

El 83. Evocaciones, lecturas y memorias a treinta años
de recuperación de la democracia

dentro del peronismo, indicaban que la principal fuerza política de oposición ya había dejado atrás el desconcierto de la derrota de 1983. De todos modos, el tono predominante seguía siendo el que imprimía el gobierno radical. Cafiero, por entonces el dirigente peronista más señalado, se preparaba para batir al alfonsinismo en su propio terreno: le disputaría la titularidad del progresismo.

Me resulta difícil circunscribir el momento a partir del cual el impulso del gobierno de Alfonsín empezó a dar signos de agotamiento, ese momento en que las dificultades comenzaron a encadenarse, sumando sus efectos y restándole impulso a la marcha. Recordemos que al asumir la presidencia en diciembre de 1983, el líder radical asumió con el cargo problemas que, aun considerados uno a uno, no eran sólo espinosos sino explosivos. Estaba por un lado la cuestión de las Islas Malvinas y los enconos y resentimientos que la derrota había producido entre militares y civiles, más allá de los muertos, mutilados y heridos que provocaron los combates. ¿Cómo aquietar ese ánimo irritado y pendenciero que, por razones obvias, mantenía a las Fuerzas Armadas en la escena? Gran parte de la sociedad había apoyado la guerra y las autoridades del peronismo se identificaban con la causa del irredentismo patriótico. ¿Podía cumplirse en esas condiciones la promesa de un gobierno previsible, en primer lugar para nuestros vecinos Brasil y Chile? El laudo del Papa Juan Pablo II por las islas del Beagle le ofreció a Alfonsín la ocasión para darle una salida al atolladero. La disputa por estas islas, ubicadas en el extremo sur del continente había llevado a nuestro país al borde de la guerra contra Chile, y laudo papal, destinado a darle una solución pacífica al litigio, debía ser aprobado o rechazado por ambos gobiernos. Cuando el espíritu malvinista comenzó a agitarse para resistir la aprobación de la fórmula ideada por el Vaticano, Alfonsín convocó a un plebiscito para que la opinión de los ciudadanos se expresara y diera consentimiento o rechazara el acuerdo. El plebiscito se llevó a cabo en noviembre de 1984 y la gran mayoría de los votos resultó favorable al tratado. Fue el momento de apogeo del alfonsinismo.

Más arduo y con pocos logros resultó para el gobierno radical el manejo de la economía nacional, gravada por una deuda externa que rondaba el 70% del PBI. El cumplimiento de las obligaciones de la deuda se hacía aún más costoso por la caída del precio de nuestros productos en el mercado internacional. La administración alfonsinista no lograría domesticar la inflación, que corroía los salarios y era otro legado de la dictadura militar. Con la excepción de un breve tramo, en 1985, cuando el llamado Plan Austral se hallaba todavía en sus comienzos, la tasa inflacionaria se mantuvo muy alta durante todo el período hasta desembocar en la hiperinflación de 1989. ¿Cómo hacer creíble en ese contexto que el alfonsinismo no era sólo liberalismo político, sino también democracia social? Asediado por el peronismo sindical y político, que reivindicaban la justicia social, y hostigado por la derecha social e ideológica, que hablaba en nombre del mercado, en ningún otro terreno como en éste, Alfonsín se vio tan acorralado y su voluntarismo político tan contrariado. En abril de 1987 comenzaron los amotinamientos de los oficiales del ejército en rechazo a la política que pretendía juzgarlos por violación de los derechos humanos bajo la dictadura. Los oficiales subalternos se negaban a acompañar a sus generales y ser conducidos, como ellos, al banquillo. Consideraban que habían combatido bajo la orden de sus jefes en lo que denominaban “guerra antisubversiva”, contienda en que habían logrado una victoria que ahora se pretendía arrebatarles. El movimiento “carapintada”, como se lo llamó, se extendió y los jefes militares eludían la orden civil de reprimir a sus integrantes. Por temor al golpe de Estado, Alfonsín cedió y negoció con los insubordinados nuevas leyes destinadas eximirlos de castigos. Pagaría un alto precio por esa concesión: en las elecciones que se celebraron ese año el radicalismo experimentó una catastrófica derrota. Fue el comienzo del fin.